

¿SE ESTÁN EXTRALIMITANDO LOS MANDATOS DE VACUNACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO? Project Syndicate

Escrito por: Jeffrey Frankel¹

Puede consultar la versión original [aquí](#)

Muchos pueden juzgar que, en los casos de programas de inmunización obligatorios existentes y otras regulaciones relacionadas con la salud, los beneficios de la intervención del gobierno superan los costos. Si es así, uno debería concluir lógicamente que lo mismo es cierto para los mandatos de vacunas COVID-19.

A principios de este mes, la Corte Suprema de EE. UU. bloqueó el intento del presidente Joe Biden de ordenar que las empresas con más de 100 empleados exijan que se vacunen contra el COVID-19 o que usen mascarillas y se hagan pruebas con regularidad. ¿Fue la administración Biden culpable de extralimitarse?

En algunos países, incluidos Austria , Ecuador e Indonesia , los gobiernos han impuesto mandatos de vacunación contra el COVID-19 a toda la población, o al menos a todos los trabajadores. Alemania está considerando actualmente si hacer lo mismo. Y muchos países, incluida Italia , han impuesto un requisito de vacunación en subconjuntos de la población, como los trabajadores de la salud o los mayores de 50 años.

Pero otros gobiernos, incluso en Dinamarca y el Reino Unido , han hecho de la vacunación una cuestión de elección individual. En algunos lugares, la oposición pública a las inyecciones obligatorias de COVID-19 es tan fuerte como el movimiento antivacunas estadounidense.

Las vacunas contra el COVID-19 funcionan. Las personas no vacunadas tienen aproximadamente 15 veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que las vacunadas . No obstante, incluso entre la mayoría de los estadounidenses que aceptan que las vacunas son seguras y efectivas, algunos argumentan que las personas deberían poder elegir si recibir la vacuna. Consideran los mandatos gubernamentales en este ámbito como un puente demasiado lejano.

La presunción de que el laissez-faire debería ser la opción predeterminada en la política pública tiene sentido para muchos economistas: antes de proponer una intervención del gobierno, se debe identificar una falla particular del mercado.

Por lo general, esto no es difícil de hacer. La contaminación ambiental es un ejemplo clásico, porque otras personas que no participan en la actividad dañina corren con el costo del aire o el agua sucios. Como resultado, el mercado producirá demasiado aire y agua sucios. Otras categorías de fallas del mercado incluyen los bienes públicos, el poder de monopolio y la incapacidad de un individuo para tomar una decisión informada (como en el caso de los niños).

¹ Jeffrey Frankel, profesor de Formación y Crecimiento de Capital en la Universidad de Harvard, anteriormente se desempeñó como miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos.



Sería muy difícil lograr que todos estén de acuerdo sobre dónde trazar la línea entre los casos en los que los beneficios de la intervención del gobierno superan los costos y los casos en los que no. Pero debería ser más fácil acordar una ordenación de varias aplicaciones prácticas de acuerdo con la fuerza del argumento a favor de la intervención. Tal clasificación, a su vez, podría alentar un pensamiento más claro sobre los méritos de los mandatos de vacunas COVID-19.

Considere los siguientes 15 problemas de política, dispuestos en una secuencia propuesta desde el caso más sólido y ampliamente aceptado para la intervención del gobierno hasta el más débil.

En primer lugar, la aplicación de la ley por parte de la policía y el sistema de justicia penal es una función fundamental del gobierno. Incluso los libertarios acérrimos están de acuerdo en que esto es apropiado. Luego, como también debería ser obvio, las personas no pueden poseer armas nucleares tácticas.

En tercer lugar, instalamos semáforos en las intersecciones concurridas y le pedimos a la policía que haga cumplir las normas. El argumento a favor de esto es incluso más sólido que el argumento a favor de exigir cinturones de seguridad, porque una mayor parte del peligro mortal de pasarse un semáforo en rojo recae sobre los demás.

Propongo que un mandato de vacunación contra el COVID-19 para todos los trabajadores (permitiendo exenciones médicas) debería caer aproximadamente en este punto de la secuencia, en la política número cuatro.

En quinto lugar, los 50 estados de EE. UU. requieren que los niños sean vacunados contra varias enfermedades transmisibles: difteria, tos ferina, poliomielitis, sarampión, rubéola y varicela. Las vacunas prácticamente han eliminado estas seis enfermedades, que solían matar a millones, de los Estados Unidos. Alguien que apruebe estos requisitos también debería apoyar un mandato de vacuna contra el COVID-19.

Sexto, regulamos la contaminación del aire, como se señaló anteriormente, porque es una externalidad que afecta la salud y el bienestar de los demás.

Séptimo, los 50 estados también exigen la vacunación contra el tétanos. Debido a que el tétanos no es una enfermedad transmisible, un libertario purista podría argumentar que las personas deberían poder decidir por sí mismas. Pero cuando se trata de niños, hay un argumento más fuerte para la intervención del gobierno.

Octavo, según una legislación de larga data, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU., la agencia que promulgaría el estándar de vacunas de Biden, también regula muchos otros peligros en el lugar de trabajo, incluidos el asbesto, el polvo de carbón y otros contaminantes del aire. Algunos libertarios podrían argumentar que las personas pueden optar por no trabajar para empleadores cuyos entornos de trabajo se sabe que no son saludables. Pero, al igual que con COVID-19, los trabajadores carecen de información completa y el gobierno puede evaluar mejor la ciencia.

Noveno, el gobierno regula estrictamente las bebidas alcohólicas, incluso a través de altos impuestos, sanciones por conducir ebrio y la prohibición de venta a menores. Se aplican restricciones similares a los productos de tabaco, la política número diez en la lista, aunque los cigarrillos, y aún más el tabaco de mascar, imponen costos más bajos

a los transeúntes que conducir ebrio. En ambos casos, la sociedad paga gran parte del costo cuando el consumidor enferma. (Casos siete y ocho, también.)

Después de esto, el caso de la intervención del gobierno se vuelve más débil. El respeto por la libertad individual sugiere que prohibir el alcohol (o los cigarrillos) por completo sería ir demasiado lejos. También sería inaplicable, como aprendieron los EE. UU. durante la era de la Prohibición (1920 a 1933).

Del mismo modo, mientras que un paternalista señalaría la irracionalidad y la adicción de los juegos de azar, una prohibición es inaplicable. Además, a diferencia del alcohol, prácticamente toda la carga del juego recae sobre los propios jugadores.

El gobierno puede ejercer el dominio eminente y apoderarse de la propiedad privada para uso público. Esta es una gran invasión de los derechos de propiedad individual y, sin embargo, la práctica es común, incluso en los EE. UU. Además, muchos conservadores apoyan el dominio eminente cuando se trata de construir un oleoducto. Muchas drogas adictivas, como la heroína, son ilegales. La mayoría de la gente apoya esto, aunque otros argumentan que su uso debería ser una cuestión de elección individual.

Concluamos con la más ilógica de las políticas gubernamentales relacionadas con la pandemia. El año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró ilegal que las líneas de cruceros y otras empresas privadas que operan en el estado exijan que sus clientes se vacunen. Pero alguien que defiende los derechos de propiedad, ¿no debería permitir que una línea de cruceros privada juzgue por sí misma si sus clientes potenciales quieren que sus compañeros de viaje se vacunen? Las opiniones políticas de DeSantis y otros como él evidentemente no se basan en el respeto de los derechos individuales, como afirman, sino en otra cosa.

Muchos pueden juzgar que, en el caso de las políticas cinco a diez, los beneficios de la intervención del gobierno superan los costos. Si es así, uno debería concluir lógicamente que lo mismo es cierto para los mandatos de vacunas COVID-19.